

CASO ARBITRAL N.º 0609-2022-CCL SEGUIDO ENTRE:

**TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.**  
(«TELEFÓNICA»)

C.

**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**  
(«MTC»)

**ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES**  
(«OSIPTEL»)

---

**LAUDO PARCIAL DE DERECHO**

---

**TIBUNAL ARBITRAL:**

LUCIANO BARCHI VELAOCHAGA (PRESIDENTE)

ROXANA JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA

GONZALO GARCÍA CALDERÓN MOREYRA

LIMA, 19 DE ENERO DE 2024

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

Orden Procesal N.º 9  
Lima, 19 de enero de 2024

**VISTOS:**

- (i) El escrito de fecha 31 de mayo de 2023 presentado por TELEFÓNICA mediante el cual presenta su demanda.
- (ii) El escrito de fecha 14 de julio de 2023 presentado por el MTC mediante el cual formula objeciones al arbitraje.
- (iii) El escrito de fecha 14 de julio de 2023 presentado por OSIPTEL mediante el cual formula objeciones al arbitraje.
- (iv) El escrito de fecha 28 de agosto de 2023 presentado por TELEFÓNICA mediante el cual absuelve las objeciones formuladas por el MTC y OSIPTEL.
- (v) El escrito de fecha 11 de octubre de 2023 presentado por el MTC mediante el cual se pronuncia sobre la réplica de TELEFÓNICA.
- (vi) El escrito de fecha 11 de octubre de 2023 presentado por OSIPTEL mediante el cual se pronuncia sobre la réplica de TELEFÓNICA.

**ANTECEDENTES:**

**1) Mediante escrito de Vistos (i), TELEFÓNICA presenta su demanda**

**1.1 Petitorio:**

TELEFÓNICA solicita al Tribunal Arbitral que respalde las siguientes pretensiones:

- a. Declare que para la reducción o terminación del servicio de telefonía pública contemplado en la Parte II del Contrato, solo resultan aplicables las reglas establecidas en las cláusulas 8.01 (c) y (d) de la Parte II del Contrato, por lo que no resulta exigible la sustitución del servicio como requisito para declarar su terminación.
- b. Declare que OSPITEL resolvió incorrectamente la solicitud de terminación del servicio de telefonía pública presentada por TELEFÓNICA mediante TP-AG-GGR-1053-16 del 3 de mayo de 2016 para los 505 centros poblados rurales listados en el informe de OSIPTEL N.º 0366- DFI/SDF/2021, que son aquellos que se identifican como Medio Probatorio A-10.
- c. Ordene la terminación del servicio de telefonía pública para los 505 centros poblados rurales listados en el informe de OSIPTEL N.º 0366-

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

DFI/SDF/2021, que son aquellos que se identifican como Medio Probatorio A-10.

Subordinadamente a la pretensión c), que:

- d. Ordene a OSIPTEL emitir una resolución de terminación del servicio de telefonía pública respecto de los 505 centros poblados rurales listados en el informe de OSIPTEL N.º 0366-DFI/SDF/2021, que son aquellos que se identifican como Medio Probatorio A-10.

Y, con relación a la solicitud de terminación del servicio de telefonía pública prestado en 251 centros poblados rurales presentada por TELEFÓNICA mediante TP-AG-GGR-1053-16 del 3 de mayo de 2016:

- e. Declare que el requisito de inviabilidad económica establecido en la cláusula 8.01 (d) de la Parte II del Contrato de Concesión, en lo que respecta al servicio de teléfonos públicos, no solo se verifica si el servicio presenta beneficios negativos para la compañía y/o el tráfico promedio del servicio de teléfonos públicos es decreciente, sino también si se produce cualquiera de las otras circunstancias establecidas por OSPITEL en los considerandos 68 y 70 de su informe N.º 0366-DFI/SDF/2021.
- f. Ordene a OSIPTEL emitir nuevo pronunciamiento sobre el pedido de terminación del servicio de telefonía pública respecto de los 251 centros poblados rurales en los cuales OSIPTEL no analizó si el servicio de teléfonos públicos era inviable económicamente, disponiendo que tal evaluación debe ejecutarse aplicando los otros parámetros establecidos por OSPITEL en los considerandos 68 y 70 de su Informe N.º 0366-DFI/SDF/2021, y no solo vía la verificación de si el servicio presenta beneficios negativos para la compañía y/o el tráfico promedio del servicio de teléfonos públicos es decreciente.

**1.2 ¿De qué trata este arbitraje?**

- 1.2.1 De acuerdo con TELEFÓNICA, la controversia consistiría en un supuesto intento de mala fe del OSIPTEL y del MTC de obtener, aparentemente, un beneficio injustificado a expensas suyas, como consecuencia del Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Portador, Servicio Telefónico Local y Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional en la República del Perú del 16 de mayo de 1994 (en adelante, «Contrato» o «Contrato de Concesión»).
- 1.2.2 El citado Contrato, según TELEFÓNICA, habría sido diseñado de tal forma que cuente con tres secciones o partes. Las Partes I y II contemplarían cada una distintos servicios de telecomunicaciones y las reglas aplicables a estos. En cambio, la Parte III contendría las reglas que específicamente los contratantes habrían querido identificar como aplicables de manera común a las Partes I y II.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 1.2.3 De acuerdo con TELEFÓNICA, el Contrato le otorgaría el derecho a solicitar al OSIPTEL que declare la terminación del servicio de telefonía pública en centros poblados rurales, contemplado en la Parte II del Contrato de Concesión, cuando dicho servicio resulte económicamente inviable.
- 1.2.4 En este caso, TELEFÓNICA indica que habría solicitado la terminación del servicio de telefonía pública en determinados centros poblados rurales al amparo de ese derecho. Sin embargo, según TELEFÓNICA, el OSIPTEL habría condicionado tal terminación a que TELEFÓNICA sustituyera el servicio por uno más beneficioso, pese a que el Contrato de Concesión en no establecería esa condición para la terminación por inviabilidad económica.
- 1.2.5 De acuerdo con TELEFÓNICA, el pedido de reducción del servicio de teléfonos públicos que fue rechazado por el OSIPTEL habría sido planteado al amparo de una regla que proviene de la Parte II del Contrato: la cláusula 8.01 (d). Ello responde a que el servicio objeto del pedido se contemplaría específicamente en dicha Parte II.
- 1.2.6 Según TELEFÓNICA, la controversia habría surgido porque, bajo la invocación de una cláusula contenida en la Parte I, el OSIPTEL pretendería imponerle a TELEFÓNICA requisitos adicionales a aquellos que la cláusula 8.01 (d) de la Parte II del Contrato de Concesión exige para que proceda el pedido; en otras palabras, la respuesta de OSIPTEL habría sido que ese literal (d) debía «integrarse» con la regla de la cláusula 8.01 (i) de la Parte I del Contrato.
- 1.2.7 TELEFÓNICA indica que la interpretación del OSIPTEL dejaría sin contenido la excepción prevista en la cláusula 8.01 (d) de la Parte II del Contrato de Concesión.
- 1.2.8 De esta forma, TELEFÓNICA sostiene que el MTC y el OSIPTEL estarían interpretando de manera arbitraria el Contrato para mantener a TELEFÓNICA sujeta a un servicio que le generaría pérdidas y que ya no permitiría alcanzar la función perseguida en el Contrato.

**2) Mediante escrito de Vistos (ii), el MTC formula objeciones al arbitraje**

**2.1) Objeción al arbitraje porque TELEFÓNICA no habría realizado el trato directo**

- 2.1.1 El MTC objeta el arbitraje, en primer lugar, debido a que TELEFÓNICA no habría incluido en el Trato Directo, de acuerdo con el procedimiento de solución de controversias estipulado en la Cláusula 3.01 del Contrato, las reclamaciones contenidas en la pretensión principal 'b', la pretensión subordinada 'd', la pretensión principal 'e' y la pretensión principal 'f' de la Demanda.
- 2.1.2 El MTC expresa que la Cláusula 3.01 del Contrato de Concesión regularía los mecanismos y procedimientos aplicables a la solución de controversias que surjan entre las Partes (cualquier controversia que surja del Contrato, su interpretación o ejecución, incluyendo cualquier aspecto relativo a su existencia, validez o terminación del Contrato) y que, en consecuencia, el Contrato establecería que

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

cualquier controversia se intentaría resolver amistosamente, como paso previo para recurrir al arbitraje).

- 2.1.3 Así, el MTC sostiene que, conforme a la Cláusula 3.01 del Contrato, las Partes tienen que resolver amistosamente cualquier controversia que se presente en la ejecución del Contrato; es decir debían agotar un procedimiento de conciliación (trato directo) y, solamente en el supuesto que no se concretara la resolución amistosa en el procedimiento de conciliación o trato directo, las materias que fueron parte del trato directo serían llevadas a arbitraje.
- 2.1.4 De acuerdo con el MTC, TELEFÓNICA no habría seguido el Trato Directo respecto de la pretensión principal 'b', la pretensión subordinada 'd', la pretensión principal 'e' y la pretensión principal 'f' de la Demanda atendiendo a la Carta N°TDP-3310-AR-AJC-22, de fecha 5 de setiembre de 2022.
- 2.1.5 El MTC indica que en la Carta N.° TDP-3310-AR-AJC-22, TELEFÓNICA habría solicitado que se declare que no resulta exigible la sustitución del servicio como requisito para declarar la terminación del servicio de telefonía pública (pretensión principal 'a') y que se dé por terminado el Servicio TUP en los 505 casos a los que se refiere la declaración de improcedencia realizada por OSIPTEL (pretensión principal 'c').
- 2.1.6 Así, el MTC señala que, de un total de seis pretensiones, solamente dos pretensiones formuladas por TELEFÓNICA en su Demanda Arbitral guardarían correspondencia con las reclamaciones previas que se encuentran contenidas en el procedimiento de Trato Directo.
- 2.1.7 El MTC indica, en consecuencia, que las reclamaciones contenidas en la pretensión principal 'b', la pretensión subordinada 'd', la pretensión principal 'e' y la pretensión principal 'f' de la Demanda de TELEFÓNICA no habrían sido materia del procedimiento de Trato Directo.
- 2.1.8 Por lo expuesto, el MTC afirma que el Tribunal Arbitral no tendría competencia para emitir pronunciamiento respecto a las cuatro pretensiones antes mencionadas de la Demanda, debido a que, respecto a dichas pretensiones, TELEFÓNICA no siguió el procedimiento de trato directo estipulado en la Cláusula 3.01 del Contrato de Concesión.
- 2.1.9 Así, el MTC solicita que se declare fundada su Objeción al Arbitraje a través de la emisión de un laudo parcial.

**2.2) Objeción al arbitraje porque las pretensiones de la Demanda versarían sobre materias no arbitrables**

- 2.2.1 El MTC expresa que todas las pretensiones de TELEFÓNICA versarían sobre materia no arbitrable, debido a que cuestionarían una decisión o resolución administrativa del OSIPTEL: la Resolución de Consejo Directivo N.° 00075-2022-CD/OSIPTEL (en adelante, «Resolución del OSIPTEL»).

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 2.2.2 Ante dicha constatación, el MTC señala que ningún tribunal arbitral podría emitir un pronunciamiento válido respecto a una decisión administrativa; es decir, no correspondería que en un arbitraje pueda declararse la nulidad, invalidez o ineficacia de una resolución administrativa emitida por el OSIPTEL.
- 2.2.3 El MTC indica que, conforme a lo establecido en la cláusula 8.01.d) de la Parte II del Contrato, sería innegable que las partes contratantes acordaron que la intervención de OSIPTEL se realizaría mediante un acto administrativo (una resolución regulatoria), que estaría sujeta a las condiciones de validez, eficacia e impugnabilidad del acto administrativo previstas por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, «LPAG»).
- 2.2.4 El MTC afirma que la Resolución del OSIPTEL debería haber sido impugnada en el ámbito administrativo o, a través de una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial.
- 2.2.5 El MTC, basándose en el artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1071 (en adelante, «Ley de Arbitraje»), sostiene que, en el presente proceso arbitral, todas las pretensiones demandadas por TELEFÓNICA se encuentran relacionadas a materia no disponible, en tanto las seis pretensiones de TELEFÓNICA impugnan la Resolución del OSIPTEL.
- 2.2.6 En tal sentido, el MTC ratifica su Objeción al Arbitraje en el sentido de que las pretensiones formuladas por TELEFÓNICA en el presente caso deberían haber sido formuladas en un procedimiento administrativo ante OSIPTEL (una eventual reconsideración) y, en forma posterior, mediante un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial (de manera directa al tratarse de una resolución que agotó la vía administrativa).
- 2.2.7 Por ello, el MTC solicita que —antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia— el Tribunal Arbitral emita un laudo parcial en el que se declare fundada su objeción al arbitraje.

**2.3) Objeción al arbitraje porque existiría materia con autoridad de cosa decidida**

- 2.3.1 El MTC expresa que cada una de las pretensiones demandadas por TELEFÓNICA en el presente arbitraje contienen un cuestionamiento directo a la Resolución del OSIPTEL.
- 2.3.2 El MTC señala que la Resolución del OSIPTEL fue notificada el 19 de abril de 2022 a TELEFÓNICA, por lo que al no haber impugnado dicha empresa la citada resolución, dentro del plazo de tres meses (es decir, hasta el 19 de julio de 2022), se concluye que la Resolución del OSIPTEL habría adquirido la condición procesal de cosa decidida; es decir, se trataría de una decisión irrevisable, al haber adquirido firmeza (en el sentido administrativo del término).
- 2.3.3 El MTC indica que TELEFÓNICA no habría alegado ni probado que su solicitud de arbitraje haya sido presentada dentro del plazo de los tres meses establecido para presentar la demanda contenciosa administrativo.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 2.3.4 El MTC sostiene que la solicitud de arbitraje fue presentada el 26 de octubre de 2022, fuera del plazo que tuvo para cuestionar la Resolución del OSIPTEL en sede judicial (seis meses después), con lo cual es innegable que la Resolución del OSIPTEL habría adquirido la condición procesal de cosa decidida.
- 2.3.5 El MTC afirma que, habiéndose advertido que las pretensiones demandadas por TELEFÓNICA impugnarían lo decidido por la Resolución del OSIPTEL y que dicha materia habría quedado firme en sede administrativa y judicial, no correspondería que se vuelva a abrir una discusión jurídica en la vía arbitral respecto de aquella materia.
- 2.3.6 En tal sentido, el MTC pide que se declare fundada su Objeción al Arbitraje.

**3) Mediante escrito de Vistos (iii), el OSIPTEL formula objeciones al arbitraje**

**3.1) Objeción al arbitraje porque la Demanda versaría sobre materia no arbitrable**

- 3.1.1 El OSIPTEL afirma que TELEFÓNICA habría reconocido, reiteradamente, que su Demanda tiene por objeto cuestionar la Resolución del OSIPTEL por medio de la que declaró improcedente su pedido para finalizar el servicio de telefonía pública, a su cargo, en cientos de centros poblados rurales del país.
- 3.1.3 El OSIPTEL señala que, de conformidad con el artículo 1, numeral 1.1 de la LPAG, la Resolución del OSIPTEL sería un acto administrativo, que cumple con todos los requisitos que dicha ley prevé para ser considerado y reconocido como tal.
- 3.1.4 El OSIPTEL expresa que, por ser un acto administrativo, la Resolución del OSIPTEL podría ser cuestionada, única y exclusivamente, a través de un proceso judicial: sea un proceso contencioso administrativo o, excepcionalmente, un proceso de amparo en la vía constitucional.
- 3.1.5 El OSIPTEL sostiene que la Resolución del OSIPTEL solamente podría cuestionarse en un proceso judicial, por lo que serían los jueces, y no los árbitros, los únicos competentes para conocer una demanda que tenga por objeto cuestionar la Resolución del OSIPTEL.
- 3.1.6 En consecuencia, de conformidad con el artículo 2, inciso 1, de la Ley de Arbitraje, el OSIPTEL considera que resultaría evidente que la Resolución del OSIPTEL no puede ser cuestionada a través de un arbitraje, y como las pretensiones de la demanda de TELEFÓNICA versarían sobre materia que no sería susceptible de arbitraje, dicha Demanda resulta improcedente y así debe ser declarada.

**3.2) Objeción al arbitraje porque la Resolución del OSIPTEL que es objeto de la Demanda cuenta con autoridad de cosa decidida**

- 3.2.1 El OSIPTEL afirma que, contra la Resolución del OSIPTEL, TELEFÓNICA no habría interpuesto impugnación alguna en la vía administrativa, específicamente el recurso opcional de reconsideración al que tenía derecho, pues dicha

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

Resolución fue emitida por un órgano que, jurídicamente, es el máximo órgano de OSIPTEL y que actuó como instancia única: el Consejo Directivo del OSIPTEL.

- 3.2.2 De esta manera, según el OSIPTEL, la Resolución cuestionada por TELEFÓNICA sería una resolución administrativamente firme que habría agotado la vía administrativa, de acuerdo con la LPAG.
- 3.2.3 El OSIPTEL indica que TELEFÓNICA tampoco habría interpuesto demanda judicial alguna contra la Resolución de OSIPTEL (ni demanda contenciosa administrativa, ni demanda constitucional de amparo). Así, el OSIPTEL destaca que TELEFÓNICA habría, simplemente, dejado de transcurrir los plazos legales sin interponer dichas demandas; precisando que la solicitud de arbitraje de TELEFÓNICA habría sido notificada seis meses después de la notificación de la Resolución del Osiptel.
- 3.2.4 El OSIPTEL sostiene que TELEFÓNICA no habría impugnado dentro de los plazos legales la Resolución del OSIPTEL, por lo que la habría consentido y, en consecuencia, dicha Resolución adquirió la autoridad de cosa decidida, equivalente en todos sus efectos y contenido a la cosa juzgada.
- 3.2.5 Finalmente, según el OSIPTEL, la Resolución del OSIPTEL no sería de libre disposición conforme al artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje y, en consecuencia, no podría ser sometida a arbitraje.

**3.3) Objeción al arbitraje porque varias de las pretensiones de TELEFÓNICA no habrían sido sometidas al procedimiento de trato directo**

- 3.3.1 El OSIPTEL señala que el convenio arbitral del Contrato suscrito entre las Partes establece un procedimiento de trato directo entre ellas, como mecanismo previo al arbitraje, para solucionar las controversias que allí se indican.
- 3.3.2 El OSIPTEL indica que, de la lectura de dicho convenio, se deduciría que, si alguna controversia no es sometida previamente a ese procedimiento de trato directo, el arbitraje no se podría iniciar ni continuar respecto a esa controversia.
- 3.3.3 El OSIPTEL sostiene que, en el presente caso, TELEFÓNICA habría solicitado al MTC y al OSIPTEL el inicio del procedimiento de trato directo mediante su Carta N.º TDP-3310-AR-AJC-22 del 5 de setiembre de 2022 y que, al confrontar el texto de esa Carta con las pretensiones contenidas en la Demanda Arbitral, se apreciaría que por lo menos cuatro de las seis pretensiones de la Demanda no habrían sido sometidas al procedimiento de trato directo que TELEFÓNICA solicitó.
- 3.3.4 El OSIPTEL afirma que, en tanto ninguna de esas pretensiones fueron sometidas al procedimiento de trato directo por TELEFÓNICA, el arbitraje no podría continuar válidamente respecto de ninguna de esas pretensiones.
- 3.3.5 En consecuencia, el OSIPTEL solicita que, en el caso de que el Tribunal Arbitral desestime su pedido principal (referido a las materias no arbitrables y la calidad de cosa decidida de la Resolución del OSIPTEL), se excluyan las cuatro pretensiones, que no habrían sido sometidas al trato directo, del presente arbitraje.



***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

**4) Mediante escrito de Vistos (IV), TELEFÓNICA se pronuncia sobre las objeciones formuladas por el MTC y por el OSIPTEL**

**4.1) Absolución a la objeción sobre la falta de trato directo**

- 4.1.1 TELEFÓNICA afirma que habría seguido el procedimiento de trato directo respecto de todas las materias controvertidas que dan lugar a las pretensiones planteadas en este arbitraje y precisa que, incluso si el Tribunal Arbitral estimara que este procedimiento no se habría seguido, no debería encontrar en este hecho un impedimento para declarar su competencia para decidir las pretensiones planteadas.
- 4.1.2 TELEFÓNICA indica que las materias controvertidas de las que derivan las pretensiones sí fueron objeto de trato directo. Además, TELEFÓNICA precisa que, conforme al Contrato, la cláusula de solución de controversias no exige que las futuras pretensiones arbitrales sean objeto específico de trato directo, sino solo las controversias.
- 4.1.3 TELEFÓNICA expresa que, según el MTC y el OSIPTEL, no habría sometido a trato directo la pretensión principal 'b', subordinada 'd', principal 'e' y principal 'f'; sin embargo, precisa que lo que debía someterse a trato directo era la controversia detrás de la pretensión, por lo que TELEFÓNICA sí habría cumplido con someter a trato directo las materias controvertidas que están detrás de las pretensiones.
- 4.1.4 Así, TELEFÓNICA concluye que las materias controvertidas, que dan lugar a las pretensiones cuestionadas por el OSIPTEL, serían exactamente a las sometidas a trato directo, siendo ilógico sostener que estas deban ser planteadas en el mecanismo de trato directo de la misma forma que en el arbitraje.
- 4.1.5 Por otro lado, TELEFÓNICA expresa que, si el Tribunal Arbitral considerara que las materias controvertidas que inspiran sus pretensiones no habrían sido objeto de trato directo, ello no podría ser óbice para denegar su competencia para decidir las.
- 4.1.6 TELEFÓNICA señala que la cláusula que contempla el trato directo establece un deber de negociar, pero este no podría ser considerado un requisito de jurisdicción. TELEFÓNICA precisa que ello respondería a que el trato directo nunca puede entenderse como un requisito de jurisdicción, sino como una aspiración de las partes de hacer sus mejores esfuerzos para negociar.
- 4.1.7 TELEFÓNICA manifiesta, además, que, incluso para quienes consideran que eventualmente el trato directo sí podría ser un requisito de jurisdicción, para serlo, este tendría que estar correctamente definido, lo cual implicaría, entre otras cosas, establecer (i) una formalidad para iniciar el procedimiento, (ii) una formalidad para culminarlo y (iii) un plazo forzoso por el cual las partes deban negociar.
- 4.1.8 TELEFÓNICA afirma que, en el caso particular, la cláusula 3.01 de la Parte III del Contrato, que contempla el trato directo, no establece formalidades para su inicio o término ni un plazo de duración para las negociaciones. Por ello, en cualquier caso, no podría entenderse como un requisito de jurisdicción.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 4.1.9 TELEFÓNICA expresa que la cláusula del Contrato carecería de factores que permitan determinar sus alcances, al no establecer un procedimiento para saber con certeza cómo se inicia o termina el trato directo, y no establece un plazo forzoso.
- 4.1.10 TELEFÓNICA indica que una cláusula de solución de controversias es un pacto contractual que debe ser ejecutado bajo el principio de la buena fe y que, en este caso, TELEFÓNICA habría seguido a cabalidad el procedimiento de trato directo —al menos dentro de lo posible— dada su indeterminabilidad.
- 4.1.11 TELEFÓNICA sostiene que las Partes ya habrían intentado negociar todas las materias controvertidas ventiladas en este arbitraje y resultaría evidente que las posiciones entre ellas son irreconciliables, por lo que carecería de sentido que el Tribunal Arbitral decline su jurisdicción y envíe a las Partes a enfrascarse en un proceso de negociaciones que sería fútil.
- 4.1.12 TELEFÓNICA afirma que sería contrario a la buena fe que se exija a las Partes perder el tiempo ya invertido en lo que va de este procedimiento arbitral para iniciar una nueva ronda de negociaciones redundante y que, sin lugar a duda, tendría el mismo desenlace que el que se tiene a la fecha.
- 4.1.13 En atención a lo expuesto, TELEFÓNICA solicita al Tribunal Arbitral desestimar la defensa de falta de jurisdicción por trato directo.

**4.2) Absolución a la objeción sobre materia no arbitrable**

- 4.2.1 TELEFÓNICA sostiene que la Resolución del OSIPTEL es una actuación contractual del organismo regulador y, como tal, es arbitrable; e, incluso si se afirmara que la Resolución del OSIPTEL corresponde a una función típicamente administrativa, esta sería arbitrable porque se ejerce en virtud de lo estipulado en el Contrato de Concesión, que al tener naturaleza de contrato-ley, inaplica la regulación distinta a la establecida en él.
- 4.2.2 TELEFÓNICA indica que los organismos reguladores pueden realizar actos contractuales que son arbitrables y, el primer motivo por el cual las materias controvertidas en este arbitraje son arbitrables es porque la Resolución del OSIPTEL sería un acto contractual del organismo regulador.
- 4.2.3 TELEFÓNICA explica que los actos de la administración pública pueden dividirse en dos: los actos administrativos, manifestación del *ius imperio*, y los actos comerciales, o de *ius gestionis*.
- 4.2.4 TELEFÓNICA señala que, mediante los primeros, la administración pública desarrolla la función administrativa. En cambio, según TELEFÓNICA, mediante los segundos, la administración entabla relaciones de índole privada y, por ende, son arbitrables.
- 4.2.4 Así, TELEFÓNICA manifiesta que la admisión de potestades administrativas, es decir, pertenecientes al Estado, responde al estado de supremacía estatal que

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

tiene su correspondencia con la situación de sujeción de los administrados, y que persigue la consecución de fines relativos al bienestar común.

- 4.2.5 Por otro lado, TELEFÓNICA expresa que, mediante los actos de *ius gestionis*, la administración pública realiza actividades de índole privada, como son las funciones que asumen los organismos reguladores sobre la base de un contrato.
- 4.2.6 TELEFÓNICA destaca que la doctrina sería prácticamente unánime al señalar que las decisiones de los organismos reguladores que son manifestación del *ius gestionis* pueden ser sometidas a arbitraje.
- 4.2.7 TELEFÓNICA sostiene, en consecuencia, que existirían actos de los organismos reguladores mediante los cuales estos no cumplen funciones administrativas típicas, sino contractuales.
- 4.2.8 TELEFÓNICA señala que estos serían aquellos actos que corresponden a funciones que tienen lugar por el hecho de haber sido atribuidas por las partes de un contrato, lo que hace que su naturaleza sea contractual, incluso si estuvieran también contempladas en la ley.
- 4.2.9 Por otro lado, TELEFÓNICA indica que el punto de partida de la argumentación de las Demandadas sobre la incompetencia del Tribunal Arbitral se halla en la supuesta aplicabilidad del artículo 3 del TUO de la Ley N.º 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por Decreto Supremo N.º 011-2019 JUS (en adelante, «LPCA»).
- 4.2.10 TELEFÓNICA expresa que, en relación con la procedencia de la demanda contencioso-administrativa, la norma es bastante clara al establecer que la pretensión en el proceso contencioso administrativo tiene como base una actuación de la administración pública sujeta al derecho administrativo.
- 4.2.11 TELEFÓNICA manifiesta que, de esta forma, el demandante acude al órgano jurisdiccional solicitando tutela jurídica bajo la invocación de hechos imputables a la administración pública, en el sentido de que ella realizó actuaciones u omisiones que afectan las titularidades del administrado, siempre que la actuación o el deber de cumplimiento no ejecutado sean sujetos al derecho administrativo, es decir, supongan el ejercicio de la función administrativa.
- 4.2.12 TELEFÓNICA afirma que nada de eso habría ocurrido en el presente caso, toda vez que planteó el pedido de cese del servicio de telefonía pública sobre la base de un derecho que le fue conferido en una regla contractual, no en una norma de derecho administrativo. Y es sobre la base de esa regla contractual que el OSIPTEL tomó la decisión que ahora cuestionamos.
- 4.2.13 TELEFÓNICA destaca que la doctrina es pacífica al señalar que aquellos actos que no son administrativos, sino contractuales, son arbitrables. Así, TELEFÓNICA precisa que los actos contractuales de los organismos reguladores tienen su fundamento en el pacto de las partes y esto, por definición, los hace de libre disposición, lo cual, en aplicación del artículo 2 de la Ley de Arbitraje los hace arbitrables.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 4.2.14 TELEFÓNICA indica que, incluso si se tratase del ejercicio de una función típicamente administrativa, la Resolución del OSIPTEL sería arbitrable en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Concesión que, al ser un contrato-ley, es la única fuente de ese acto.
- 4.2.15 TELEFÓNICA afirma que un sector importante de la doctrina y la jurisprudencia considera que, tratándose de un contrato-ley, incluso ciertas actividades de los reguladores consideradas típicamente administrativas pueden ser sometidas a arbitraje.
- 4.2.17 TELEFÓNICA manifiesta que, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, al Contrato Ley le resulta aplicable sus propias disposiciones y las normas que estaban vigente cuando este contrato fue suscrito, por lo que la fuente de una actuación del regulador no es una norma general sino el contrato-ley, lo que implica que las controversias que se deriven de ella estén sometidas a la cláusula de resolución de controversias pactada.
- 4.2.19 TELEFÓNICA afirma que, atendiendo a lo señalado, la Resolución del OSIPTEL es arbitrable, en tanto esta evidentemente responde al cumplimiento de una obligación establecida en el Contrato de Concesión; es decir, se trataría de un acto contractual.
- 4.2.20 TELEFÓNICA sostiene que, en este caso, OSIPTEL no actuaría por la fuerza de la ley, sino por encargo de las partes, el cual fue aceptado por el OSIPTEL en la Primera Cláusula Adicional del Contrato.
- 4.2.21 TELEFÓNICA indica que, durante toda su evaluación, OSIPTEL observó exclusivamente los criterios y procedimientos establecidos en el Contrato de Concesión, por lo que se acreditaría que la Resolución de Osipitel se ha expedido en cumplimiento de una obligación atribuida por el Contrato de Concesión y, por ello, este sería un acto de libre disposición.
- 4.2.22 Finalmente, TELEFÓNICA expresa que, incluso si se pudiese sostener que el encargo de OSIPTEL de decidir la terminación del servicio por inviabilidad económica constituye una función típicamente administrativa, en cualquier caso, las controversias que emanen de su ejercicio son arbitrables, en tanto esto responde a que este es un contrato-ley y, por tanto, este es la única fuente de esta actuación es el Contrato de Concesión, que tiene un convenio arbitral.

**4.3) Absolución a la objeción sobre cosa decidida**

- 4.3.1 TELEFÓNICA señala que las Demandadas alegan que la Resolución del OSIPTEL sería definitiva, ya que tendría calidad de cosa decidida. Sin embargo, TELEFÓNICA indica que la conclusión de las Demandadas es equivocada porque partiría de una premisa falsa: la Resolución del OSIPTEL no es un acto administrativo.
- 4.3.2 TELEFÓNICA afirma que, por ello, no debía seguir el proceso impugnativo descrito en la LPAG, sino el mecanismo de solución de controversias pactado en el Contrato de Concesión.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 4.3.3 TELEFÓNICA indica que, considerando que la Resolución del OSIPTEL no ha sido emitida en el marco de normas de derecho público o potestades administrativas, sino en base a una relación contractual, no correspondería aplicar los plazos de esta norma a la impugnación de dicha decisión.
- 4.3.4 TELEFÓNICA, por lo tanto, solicita al Tribunal Arbitral desestimar la excepción de incompetencia por cosa decidida.

**5) Mediante escrito de Vistos (V), el MTC presenta su escrito de réplica en respuesta a la réplica de TELEFÓNICA**

**5.1) Pronunciamiento sobre escrito de réplica de TELEFÓNICA con relación al trato directo**

- 5.1.1 El MTC indica que con la primera Objeción al Arbitraje ha solicitado que el Tribunal Arbitral declare que no tiene competencia para evaluar la pretensión principal 'b', la pretensión subordinada 'd', la pretensión principal 'e' y la pretensión principal 'f' de la Demanda presentada, debido a que, respecto a dichas pretensiones, TELEFÓNICA no habría seguido el procedimiento de solución de controversias estipulado en la Cláusula 3.01 del Contrato de Concesión.
- 5.1.2 EL MTC afirma que ESTAS cuatro pretensiones demandadas no tendrían correspondencia con las reclamaciones de TELEFÓNICA que fueron materia del Trato Directo.
- 5.1.3 El MTC señala que, en el escrito de réplica de TELEFÓNICA, habría quedado debidamente acreditado que la empresa demandante no siguió el procedimiento de Trato Directo respecto de cuatro pretensiones mencionadas.
- 5.1.4 El MTC expresa que, ante dicha evidencia, TELEFÓNICA habría alegado que la cláusula arbitral exigiría que solamente las controversias deben ser materia del procedimiento de trato directo y que dicho convenio arbitral del Contrato de Concesión no exigiría que las futuras pretensiones arbitrales sean objeto de trato directo.
- 5.1.5 El MTC sostiene, al respecto, que existirían cuatro pretensiones demandadas que no tienen correspondencia con las reclamaciones de TELEFÓNICA que fueron materia del Trato Directo, y, al no haberse seguido el trato directo respecto a las citadas cuatro pretensiones, conforme a lo establecido en la Cláusula 3.01 del Contrato de Concesión, la consecuencia es que el Tribunal Arbitral carecería de competencia para pronunciarse en el laudo sobre dichas pretensiones.
- 5.1.6 El MTC manifiesta que la alusión a «materia controvertida» no podría justificar la ausencia de trato directo que respalden las futuras pretensiones demandadas. El MTC, además, postula que sería irrefutable que las reclamaciones presentadas en el trato directo no pueden ser genéricas, sino que deben ser concretas y precisas para que se constituyan en el antecedente necesario de las futuras pretensiones que se incorporen en la demanda arbitral.

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 5.1.7 Por otro lado, el MTC señala que TELEFÓNICA alegaría que el procedimiento de trato directo contemplado en el Contrato de Concesión no es un requisito de jurisdicción y que tal interpretación de TELEFÓNICA intentaría desconocer la literalidad de la Cláusula 3.01 del Contrato de Concesión.
- 5.1.8 El MTC indica que el pacto contractual señala expresamente que el procedimiento arbitral no será iniciado si es que no se concluye el procedimiento de trato directo; es decir, se afectaría la jurisdicción o competencia del Tribunal Arbitral cuando se intenta que se conozca y se decida respecto a pretensiones demandadas que no tiene como antecedente necesario las reclamaciones concretas y precisas en la etapa o el procedimiento de trato directo.
- 5.1.9 En consecuencia, atendiendo a que existen cuatro pretensiones demandadas por TELEFÓNICA que no tendrían el respaldo del procedimiento de trato directo, el MTC concluye que el Tribunal Arbitral no tiene competencia para emitir pronunciamiento respecto a las referidas pretensiones, por lo que su objeción debe ser declarada fundada.

### **5.2) Pronunciamiento sobre escrito de réplica de TELEFÓNICA con relación a las materias no arbitrables**

- 5.2.1 El MTC expresa que TELEFÓNICA fundamenta su réplica en que la Resolución del OSIPTEL sería una actuación contractual del organismo regulador y, como tal, sería arbitrable, y que la decisión del OSIPTEL sería arbitrable porque se ejerce en virtud del Contrato de Concesión, que sería un contrato-ley.
- 5.2.2 El MTC señala que lo determinante para definir cuándo estamos ante un acto de *ius imperium* o a un acto de gestión, es el régimen jurídico que regula esa concreta actuación administrativa, lo que permitirá definir si el ordenamiento jurídico le atribuye una potestad administrativa o si, por convenir al interés general, una cierta actuación desarrollada por un ente administrativo no se encuentra sujeta al Derecho Administrativo y se remite a otro tipo de normas.
- 5.2.3 El MTC indica, al respecto, que la Administración no posee una voluntad propia distinta de la ley, sino que rige su conducta por el principio de legalidad. El MTC precisa que es el principio de legalidad el soporte básico que sostiene toda actuación administrativa es la ley la que define qué régimen jurídico será aplicable en una determinada situación.
- 5.2.4 El MTC manifiesta que, incluso si se asumiera la tesis expuesta en la Réplica, TELEFÓNICA no habría señalado cuál es la base legal que permitiría, de forma indubitable, que se le atribuyan «funciones» al OSIPTEL mediante un contrato.
- 5.2.5 El MTC afirma que, en la Réplica, TELEFÓNICA sostiene que el OSIPTEL habría actuado en base a una función asumida contractualmente y que dicha afirmación no fundamentaría cómo es que el OSIPTEL puede asumir funciones en base a estipulaciones contractuales sin que una ley se lo permita.
- 5.2.6 El MTC expresa que estaría plenamente acreditado que es la Ley N.º 26285 la que otorga al OSIPTEL competencias para emitir actos administrativos dentro de los

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

marcos establecidos por las normas del sector y los respectivos contratos de concesión.

- 5.2.7 De esta forma, el MTC indica que no existiría duda alguna que la actuación del OSIPTEL sería el resultado de la existencia de una previa habilitación legal que le atribuye una competencia precisa y determinada, respecto de una cuestión de orden público, por lo que cabe precisar que la Resolución del OSIPTEL es un acto administrativo.
- 5.2.8 El MTC sostiene que las afirmaciones de TELEFÓNICA incurrirían en un error porque pretende sostener que una atribución legalmente establecida a favor de un organismo regulador dejaría de serlo simplemente porque estuviera contemplada en un contrato.
- 5.2.9 El MTC destaca que, si una norma atribuye una competencia a una entidad pública, a través de la voluntad contractual no se puede afectar, en ningún sentido, lo establecido por ella, porque ello supondría una rebajar o eliminar el carácter vinculante de las leyes por el mero arbitrio de la voluntad particular.
- 5.2.10 El MTC señala que la Resolución del OSIPTEL sería la manifestación del ejercicio de una competencia legalmente atribuida al OSIPTEL y que, por tratarse de una declaración con efectos individuales, basada en normas de derecho público, configuraría como un acto administrativo.
- 5.2.11 El MTC expresa que el Contrato de Concesión suscrito entre el Estado peruano y TELEFÓNICA no tiene naturaleza de Contrato-Ley, porque, para que califique como contrato-ley, tendría que especificarse la normativa especial que cataloga al Contrato de Concesión como contrato-ley.
- 5.2.12 El MTC sostiene que, conforme al artículo 4 de la Ley 26285, el Contrato de Concesión que vincula al Estado peruano y TELEFÓNICA no es un Contrato-Ley, en tanto la normativa especial excluyó la telefonía pública de los contratos de concesión que tiene naturaleza de contrato-ley.
- 5.2.13 El MTC afirma, por lo tanto, que los plazos y el mecanismo de solución de controversias regulado en la LPAG y en la LPCA son aplicables a TELEFÓNICA.
- 5.2.14 Asimismo, el MTC manifiesta que las pretensiones de la Demanda se encuentran relacionadas a materia no disponible porque impugnan una decisión administrativa del OSIPTEL.
- 5.2.15 El MTC indica que estaríamos ante pedidos concretos que contienen cuestionamientos a una decisión administrativa, que resulta ser una materia que no puede ser discutida ni decidida en un arbitraje, por ser una materia no disponible.
- 5.2.16 En consecuencia, el MTC ratifica su Objeción al Arbitraje en el sentido de que las pretensiones formuladas por TELEFÓNICA en el presente caso debieron ser formuladas en un procedimiento administrativo ante el OSIPTEL (una eventual reconsideración) y, en forma posterior, mediante un proceso contencioso

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

administrativo ante el Poder Judicial (de manera directa al tratarse de una resolución que agotó la vía administrativa).

**5.3) Pronunciamiento sobre escrito de réplica de TELEFÓNICA con relación a la cosa decidida**

- 5.2.1 El MTC expresa que todas las pretensiones demandadas por TELEFÓNICA cuestionan una resolución administrativa del OSIPTEL que adquirió la calidad de Cosa Decidida, al no haberse impugnado dentro del plazo establecido por la normativa aplicable.
- 5.2.2 El MTC indica que TELEFÓNICA insiste en que el Contrato de Concesión sería un contrato-ley, pero que dicho argumento ha quedado desvirtuado en tanto el Contrato de Concesión no es un contrato-ley porque la normativa especial (Ley N.º 26285) excluyó la telefonía pública de los contratos de concesión que tiene naturaleza de contrato-ley.
- 5.2.3 En consecuencia, el MTC afirma que, dado que las pretensiones impugnan lo decidido por la Resolución del OSIPTEL sobre una materia que ha quedado firme en sede administrativa y judicial, no corresponde cuestionar en la vía arbitral aquella materia que ya fue conocida y decidida por el Consejo Directivo del OSIPTEL.

**6) Mediante escrito de Vistos (VI), el OSIPTEL presenta su escrito de dúplica en respuesta a la réplica de TELEFÓNICA**

- 6.1 El OSIPTEL reitera que todas las pretensiones de la Demanda de TELEFÓNICA tienen por objeto cuestionar la Resolución del Osiptel y el OSIPTEL destaca que la Resolución cuestionada fue emitida en el ejercicio de las funciones administrativas que la Ley de confirió antes de la celebración del Contrato de Concesión.
- 6.2 El OSIPTEL indica que, desde antes de la celebración del Contrato, la ley le habría conferido —entre otras funciones— la función de «Supervisar la calidad del servicio y la ejecución de los contratos de concesión [...]» y la función de «Dar resoluciones regulatorias dentro de los marcos establecidos por las normas del sector y los respectivos contratos de concesión», así como «d) Conocer administrativamente las reclamaciones de los concesionarios [...]», como es el caso de TELEFÓNICA.
- 6.3 El OSIPTEL expresa que TELEFÓNICA se equivoca cuando afirma que, que al emitir la Resolución que ella cuestiona, el OSIPTEL actuó en ejercicio de una pretendida estipulación contractual, y no en ejercicio de funciones administrativas conferidas por la ley, y que esa resolución no es un acto administrativo sino un acto contractual
- 6.4 El OSIPTEL afirma que, como todo organismo público, el OSIPTEL está sometido al principio de legalidad, por lo que solo puede actuar en ejercicio de funciones y



***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- competencias que le confiere la ley, y no en virtud de estipulación contractual alguna.
- 6.5 El OSIPTEL manifiesta que sería inobjetable que un contrato no puede crear, instituir o generar las funciones o competencias con las que puede actuar un organismo público, como es el caso del OSIPTEL.
- 6.6 El OSIPTEL señala que, a lo más, el contrato puede recoger o declarar alguna función que la ley haya conferido previamente al organismo público, pero eso no significa que sea el contrato —y no la ley— el que esté creando, instituyendo o generando esa función.
- 6.7 El OSIPTEL indica que, de la misma manera, la naturaleza jurídica de la Resolución del OSIPTEL, que TELEFÓNICA cuestiona, depende de la ley y no de una supuesta estipulación contractual.
- 6.8 En consecuencia, el OSIPTEL afirma que, por ser un acto administrativo, la Resolución del OSIPTEL debió ser cuestionada en sede judicial y, debido a que TELEFÓNICA no lo hizo, la Resolución es cosa decidida y no puede ser cuestionada a través de un arbitraje.
- 6.9 Por otro lado, el OSIPTEL sostiene que TELEFÓNICA habría reconocido que cuatro de sus pretensiones no fueron sometidas al procedimiento de trato directo, pactado en el Contrato, por lo que deberían ser excluidas del arbitraje.
- 6.10 El OSIPTEL afirma que ninguna de esas pretensiones fue sometida al trato directo y que ello puede advertirse de la Carta N.º TDP-3310- AR-AJC-22, del 5 de setiembre de 2022).
- 6.11 El OSIPTEL señala que la distinción que hace TELEFÓNICA entre «controversia» y «pretensión» no está prevista en el contrato, y mucho menos en el convenio arbitral.
- 6.12 El OSIPTEL indica que, en caso de asumir el argumento de TELEFÓNICA, el procedimiento de trato directo se convertiría en una simple formalidad y sería contrario a la buena fe.
- 6.13 El OSIPTEL sostiene que TELEFÓNICA no sometió al procedimiento de trato directo todas las controversias o pretensiones que ahora formula en sede arbitral, por lo cual resultan improcedentes y deben ser excluidas del arbitraje.
- 6.14 El OSIPTEL expresa que TELEFÓNICA confunde la competencia del Tribunal Arbitral con los requisitos establecidos en el convenio arbitral para poder iniciar válidamente un arbitraje y precisa que el Tribunal Arbitral se encuentra obligado a ejercer su competencia dentro de los límites establecidos en el propio convenio.
- 6.15 De esta manera, el OSIPTEL afirma que, si las controversias que son objeto del arbitraje no han sido sometidas previamente al trato directo, entonces, el arbitraje no puede continuar respecto a dichas controversias.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

6.16 Por lo tanto, el OSIPTEL solicita al Tribunal Arbitral que sus defensas de forma formuladas en el Memorial de Contestación sean declaradas fundadas en el orden que han sido propuestas.

**7) Audiencia de ilustración de excepciones**

Con fecha 7 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la audiencia de ilustración de excepciones.

**8) Fecha para emisión de laudo parcial**

Mediante Orden Procesal N.º 7 de fecha 15 de noviembre de 2023 el Tribunal Arbitral se señaló como fecha para la emisión de laudo parcial el 29 de enero de 2024.

**CONSIDERANDO:**

**1) Bifurcación**

1.1) De acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Arbitraje:

«Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesario».

1.2) Según el numeral 4 del artículo 41 de la Ley de Arbitraje:

«Salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral decidirá esas excepciones u objeciones con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia. Si el tribunal arbitral desestima la excepción u objeción, sea como cuestión previa o sea en el laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia, su decisión solo podrá ser impugnada mediante recurso de anulación contra dicho laudo».

1.3) En este mismo sentido, de conformidad con el numeral 5 del artículo 27 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercial de Lima (en adelante, Reglamento):

«El Tribunal Arbitral puede resolver las excepciones u objeciones mediante un laudo parcial o proseguir con sus actuaciones y resolver acerca de ellas en un laudo sobre el fondo, si lo considera apropiado, según las circunstancias del caso».

1.4) CANTUARIAS SALAVERRY, citando a VARADY, BARCELÓ y VON MEHREN, señala: «el "laudo parcial", está referido a aquellos laudos que resuelven de manera definitiva parte de la controversia sometida a conocimiento de un tribunal arbitral, dejando

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

pendiente de resolver (sea en otro laudo parcial o en el laudo final) el resto del conflicto»<sup>1</sup>.

- 1.5) Deben analizarse dos aspectos para determinar la oportunidad para resolver las excepciones u objeciones: (i) si estas están intrínsecamente vinculadas con el fondo de la controversia y (ii) si existen razones de economía procesal que justifiquen resolver con carácter previo.
- 1.6) La doctrina internacional considera que cuando las excepciones u objeciones están relacionadas al fondo de la controversia corresponde que sean resueltas «junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia». Así, PAULSSON y PETROCHILOS señalan:

«Será normalmente más eficiente para el tribunal evaluar la objeción de jurisdicción junto con el fondo cuando la objeción sea relativamente simple o cuando las cuestiones jurisdiccionales estén demasiado estrechamente relacionadas con la cuestión de fondo»<sup>2</sup>.

- 1.7) En este mismo sentido BORN afirma:

«En muchos casos, particularmente cuando hay superposiciones de hechos y/o derecho entre diferentes asuntos (por ejemplo, jurisdicción y responsabilidad; responsabilidad y daños), puede ser un desperdicio, y también lento, bifurcar el procedimiento arbitral»<sup>3</sup>.

- 1.8) Lo señalado por la doctrina ha sido compartido por los tribunales arbitrales. Así, por ejemplo, en el caso 3 en ICC Dispute Resolution Bulletin 2017 Issue I, 2017, el tribunal arbitral determinó resolver las objeciones formuladas (cosa juzgada y prescripción) «junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia» por lo siguiente: «ameritan más bien ser examinadas con el fondo debido a que los actos y hechos que las justifican están íntimamente ligados con los hechos y las pruebas respecto del fondo»<sup>4</sup>.
- 1.9) En otro caso CCI también se decidió resolver una objeción como cuestión previa cuando las cuestiones preliminares no estaban vinculadas con el fondo de la controversia. El tribunal arbitral señaló como criterio: «si las cuestiones que se

---

<sup>1</sup> CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. «Los laudos parciales en la nueva Ley de Arbitraje: características y efectos». En: ***Revista Peruana de Arbitraje***. No. 9, Lima, 2009, pág. 73-74.

<sup>2</sup> Paulsson, Jan y Petrochilos, Georgios. «UNCITRAL Arbitration». Kluwer Law International, 2017, pág. 202-203. Traducción libre: «it will normally be more efficient for the tribunal to consider the objection to jurisdiction together with the merits when the entire case is relatively simple or when jurisdictional considerations are too closely intertwined with the substantive issue».

<sup>3</sup> BORN, Gary. ***International Commercial Arbitration***. Segunda edición. Kluwer Law International, 2014, pág. 2243-2244. Traducción libre: «In many cases, particularly where there are factual and/or legal overlaps between different issues (e.g. jurisdiction and liability; liability and damages) it may be wasteful, as well as slow, to bifurcate the arbitral proceedings».

<sup>4</sup> ICC Digital Library.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

determinarán como preliminares son lo suficientemente distintas de las cuestiones que serán determinadas como principales y si las primeras se pueden examinar y decidir independientemente de las últimas»<sup>5</sup>.

- 1.10) Respecto a las razones de economía procesal, VASANI señala: «las consideraciones de costos y eficiencias son relevantes tanto en la bifurcación de las fases de jurisdicción y fondo, como en las fases de fondo y quantum. La bifurcación o trifurcación pueden incrementar o disminuir las eficiencias y costos, dependiendo en las circunstancias de cada caso»<sup>6</sup>.
- 1.11) Los tribunales comerciales comparten este criterio. En el Caso CCI N.º 14338 se decidió resolver la objeción como cuestión previa porque ello suponía un ahorro de costos en tiempo y dinero<sup>7</sup>. En otro caso CCI el tribunal arbitral señaló: «[a] analizar la petición de bifurcación, un tribunal debe evaluar las repercusiones en cuanto a eficiencia en tiempo y costos que pueden provocar la adopción (u omisión) de la medida»<sup>8</sup>.
- 1.12) En opinión del Tribunal Arbitral, en el presente caso las objeciones formuladas por las Demandadas pueden ser examinadas y decididas independientemente de las cuestiones vinculadas con el fondo de la controversia. Asimismo, decidir las objeciones junto con las cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo de la controversia podría incrementar, innecesariamente, los costos a las partes.
- 1.13) Por lo expuesto, de conformidad con la facultad concedida en el numeral 4 del artículo 41 de la Ley de Arbitraje, el Tribunal Arbitral decidirá las objeciones formuladas por las Demandadas con carácter previo, emitiendo el respectivo laudo parcial.
- 1.14) En ese sentido, al efecto de resolver las objeciones presentadas por las Demandadas, el Tribunal Arbitral, en primer lugar, definirá si la materia controvertida expresada en las pretensiones de la Demanda es o no arbitrable, para, posteriormente, en caso corresponda, determinar si nos encontramos ante pretensiones con calidad de cosa decidida, y si estas han cumplido con el procedimiento del trato directo.

---

<sup>5</sup> Case 4 en ICC Dispute Resolution Bulletin 2017 Issue I, 2017. Traducción libre: «Whether the issues to be determined as preliminary ones are sufficiently distinct from the issues to be determined as main issues, and whether the former can be examined and decided independently of the latter».

<sup>6</sup> VASANI, Baiju S. «Bi-Trifurcation of Investment Disputes». En: ***Arbitration Under International Investment Agreements: a guide to the key issues***. Oxford University Press, 2010, pág. 124. Traducción libre: «Cost and efficiency considerations are relevant in both the bifurcation of the jurisdiction and merits phases as well as the merits and quantum phases. Bifurcation and trifurcation may increase or decrease efficiencies and cost, depending on the circumstances of each case».

<sup>7</sup> Orden procesal de marzo de 2008 en el caso CCI No. 14338 (extracto). En: «Special Supplement 2014: Procedural Decisions in ICC Arbitration», ICC, 2014.

<sup>8</sup> Case 3 en ICC Dispute Resolution Bulletin 2017 Issue I, 2017.

**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

---

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

**2. Objeción referida a materias no arbitrables**

- 2.1) Resulta pertinente precisar que, debido a que el arbitraje es un proceso privado con consecuencias públicas, determinadas controversias no pueden ser resueltas a través de dicho mecanismo, en tanto sus procesos generalmente forman parte del dominio público.

**A) Arbitrabilidad**

- 2.2) De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Arbitraje

«Pueden someterse a arbitraje sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen».

- 2.3) En tal sentido, es necesario que la materia sobre la que versa el arbitraje sea arbitrable. Es importante determinar el campo de la «arbitrabilidad» pues nos permite responder la pregunta de qué puede someterse a arbitraje.

- 2.4) Respecto a la «arbitrabilidad», González DE COSSIO afirma que: «Para que un acuerdo arbitral sea válido, deber ser lícito. Es decir, es necesario que la materia sea arbitrable. Susceptible de ser ventilada en arbitraje»<sup>9</sup>.

- 2.5) Como señala GONZÁLEZ DE COSSIO la arbitrabilidad *ratione materiae* u objetiva «es una norma protectora de algún interés general o público. Esto es lo que lo diferencia de otros requisitos de validez del acuerdo arbitral que buscan resguardar intereses privados (como lo es la capacidad o la forma)»<sup>10</sup>.

- 2.6) De acuerdo con la Ley de Arbitraje no son arbitrables las materias que:

- 1) no son «de libre disposición conforme a derecho»; y
- 2) aquellas que sean excluidas por la ley (o los tratados o acuerdos internacionales).

- 2.7) De lo visto, el criterio principal de arbitrabilidad (objetiva) adoptado por la Ley de Arbitraje es el de la «disponibilidad». En la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje española<sup>11</sup> se consideró innecesario que la ley contenga un elenco, siquiera ejemplificativo, de materias que no son de libre disposición<sup>12</sup>. Ello se corresponde con la tendencia de las legislaciones de expandir al máximo las

---

<sup>9</sup> GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco. **Arbitraje**. México: Porrúa, 2014, pág. 245.

<sup>10</sup> IBIDEM, págs. 245-246.

<sup>11</sup> El artículo 2 de la Ley de Arbitraje española es similar al numeral 1 del artículo 2 del Decreto Legislativo No. 1071.

<sup>12</sup> POMBO, Fernando. «Sobre la noción de arbitrabilidad en supuestos internacionales». En: **Tratado de derecho arbitral**. Tomo II. Carlos Alberto Soto Coaguila (director). Bogotá: Editorial Ibañez, 2011, pág. 169.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

materias arbitrables<sup>13</sup>. En tal sentido, de la Ley de Arbitraje puede deducirse que la «arbitrabilidad» es la regla y la «inarbitrabilidad» es la excepción.

- 2.8) Además, es importante destacar que las materias de libre disponibilidad son asuntos respecto de las cuales las partes están facultadas para ejercer su autonomía de la voluntad, de tal manera que no son susceptibles de arbitraje aquellas que son sustraídas de la autorregulación de los particulares<sup>14</sup>.

**B) Arbitrabilidad en el presente caso de acuerdo con el MTC y OSIPTEL**

- 2.9) En el presente caso, las Demandadas señalan que la materia sometida a la competencia del Tribunal Arbitral sería inarbitrable, en tanto las pretensiones de la Demanda de TELEFÓNICA tienen por objeto cuestionar la Resolución del Osiptel que declaró improcedente el pedido de finalizar el servicio de telefonía pública a su cargo en cientos de poblados rurales del País.
- 2.10) Las Demandadas destacan que dicha Resolución es un acto administrativo al (i) ser la declaración de una entidad pública; (ii) haber sido emitida en el marco de normas de derecho público; (iii) está destinada a producir efectos jurídicos sobre los administrados; y (iv) lo hace dentro de una situación concreta a propósito del pedido de TELEFÓNICA.
- 2.11) De esta forma, las Demandadas expresan que la Resolución de Osiptel solo puede ser cuestionada, única y exclusivamente, a través de un proceso judicial, sea un proceso contencioso administrativo o, excepcionalmente, un proceso de amparo en la vía constitucional.
- 2.12) Finalmente, las Demandadas precisan que lo resuelto por la Resolución de Osiptel no es de libre disposición conforme a derecho, por lo que resuelto en ella no puede ser sometido a arbitraje, conforme al artículo 2.1 de la Ley de Arbitraje.

**C) Competencias del OSIPTEL**

- 2.13) De acuerdo con la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N.º 27332, el OSIPTEL es un organismo público especializado, regulador y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros que cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera.
- 2.14) El OSIPTEL actúa dentro del marco de la normativa vigente establecida para cada servicio público, pero además de aquella que se deriva de los respectivos contratos

---

<sup>13</sup> Mantilla-Serrano citado por POMBO, Fernando. OB. CIT., nota (10) página 169. También ver, CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. «Comentarios al artículo 3 de la Ley peruana de arbitraje». En: **Comentarios a la Ley peruana de Arbitraje**. Tomo I. Coordinadores: Carlos Soto Coaguila y Alfredo Bullard González. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2011, pág. 9.

<sup>14</sup> LORCA NAVARRETE, Antonio María y SILGUERO ESTAGNAN, Joaquín. **Derecho de arbitraje español**. Madrid: Dykinson, 1994, pág. 38.

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

de concesión<sup>15</sup>. Se trata de una entidad administrativa con autonomía orgánica; es decir, se trata de un centro de imputación de derechos y obligaciones distintos de la Administración General<sup>16</sup>.

- 2.15) Además, el OSIPTEL tiene la calidad de autoridad administrativa, en tanto tiene atribuidos el ejercicio de potestades públicas de regulación y de producción de actos que inciden en la esfera de los particulares<sup>17</sup>.
- 2.16) El OSIPTEL tiene como funciones generales las de supervisar, regular, normar, fiscalizar y sancionar, solucionar controversias y solucionar reclamos de usuarios. En la doctrina peruana, ZEGARRA expresa que estas atribuciones tienen como finalidad garantizar que en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones rijan los principios de libre competencia, se protejan los derechos de los usuarios y se mantenga un equilibrio en dicha actividad económica<sup>18</sup>.
- 2.17) Resulta pertinente señalar que la naturaleza, objetivo, funciones y estructura orgánica del OSIPTEL se encuentran establecidos en su Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF). Con relación a las funciones del OSIPTEL, el ROF establece el alcance general de cada una de estas:

<b>Función</b>	<b>Competencias</b>
Reguladora	Facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades y, por ello, dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.
Normativa	Facultad de dictar los reglamentos o normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. Además, anexa la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión.
Fiscalizadora y sancionadora	Contempla la facultad de calificar infracciones e imponer medidas correctivas según corresponda a las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o

---

<sup>15</sup> Zegarra Valdivia, Diego. «El marco institucional y normativo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones». En: ***Revista de Derecho Administrativo***. N.º 5. Lima: Círculo de Derecho Administrativo, 2008, pág. 133.

<sup>16</sup> Ídem.

<sup>17</sup> Íbidem, pág. 134.

<sup>18</sup> Íbidem, pág. 141.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

	técnicas, así como de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión.
Solución de controversias	Comprende la facultad de conocer y resolver toda controversia que afecte o pueda afectar el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, aunque solo una de las partes tenga la condición de empresa operadora. Adicionalmente, conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre estas y sus usuarios, y de resolver los conflictos y controversias entre estos. Asimismo, resolver controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo.
Solución de reclamos	Facultad de solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia, en las materias señaladas en la normativa correspondiente.
Supervisora	Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las empresas operadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia. A su vez, verifica el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o norma emitida por el propio OSIPTEL.

- 2.18) Con relación a la función reguladora, ZEGARRA indica que el legislador peruano ha restringido esta función al ámbito de fijación de tarifas, por lo cual le ha dado un contenido más económico que aquél general que comprende un conjunto de técnicas de intervención pública en el mercado<sup>19</sup>.
- 2.19) Por otro lado, analizando la función normativa, ZEGARRA expresa que el legislador peruano ha querido que la entidad reguladora de las telecomunicaciones pueda ejercerla de forma exclusiva y dentro del ámbito de su competencia a través de reglamentos y normas de carácter general<sup>20</sup>.
- 2.20) ZEGARRA, además, afirma que, al mismo tiempo, se le brinda al OSIPTEL la facultad de dictar mandatos y normas de carácter particular que estén referidos a actividades bajo su competencia o de sus usuarios<sup>21</sup>.
- 2.21) Sobre la función fiscalizadora y sancionadora, el profesor ZEGARRA manifiesta que se ha dotado de contenido al ejercicio de la función de fiscalización, con lo que podrá haber una real tutela de aquellos intereses, vinculados con la prestación del servicio público de telecomunicaciones, y una verdadera garantía de la eficacia de la potestad sancionadora de la entidad reguladora<sup>22</sup>.
- 2.22) Con relación a la función de solución de controversias, ZEGARRA indica que el objetivo de contar con un Tribunal que desarrolle funciones resolutorias distintas del

<sup>19</sup> Ibidem, pág. 142.

<sup>20</sup> Ibidem, pág. 143.

<sup>21</sup> Idem.

<sup>22</sup> Ibidem, pág. 145.



### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

Consejo Directivo, es que el mismo constituya un órgano neutral, que actúe independientemente tanto respecto de la propia entidad reguladora como del Poder Ejecutivo y de los operadores para generar seguridad jurídica en el mercado<sup>23</sup>.

- 2.23) Finalmente, respecto a la función supervisora, ZEGARRA sostiene que las entidades de regulación, como es el caso del OSIPTEL, se erigen como garantes del normal desarrollo de determinadas actividades y dicha garantía suele basarse en un control previo, en un seguimiento de la actividad, mediante el ejercicio de facultades de vigilancia e inspección, en la posibilidad correctora de imponer mandatos imperativos, etc.<sup>24</sup>.

### **D) Análisis del caso particular**

- 2.24) En el presente caso, las Demandadas, para justificar que la Resolución de Osiptel sería un acto administrativo, identifican las siguientes funciones del OSIPTEL:

6.2.3. El artículo 3° de la Ley N.º 27332, “Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos”, con la modificación a su literal ‘c’ introducida por la Ley N.º 27631 (vigente desde el 17 de enero de 2002). Dicho artículo legal, invocado explícitamente en el primer párrafo de los considerandos de la Resolución del Osiptel, establece: «3.1. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, los Organismos Reguladores [como lo es Osiptel] ejercen [entre otras] las siguientes funciones: a) **Función supervisora**: comprende la facultad de **verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas** [como ocurre con Telefónica], así como la facultad de verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador **o de cualquier otra obligación** que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisada; [...] c) **Función normativa**: comprende la facultad de **dictar** en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y **mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas** o de sus usuarios»; literal este último que agrega: «Comprende, a su vez, la **facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones** establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas **derivadas de los contratos de concesión**, bajo su ámbito, así como por el incumplimiento de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas por ellos mismos. [...]».

Escrito de Contestación de la Demanda del OSIPTEL

---

<sup>23</sup> Ibidem, pág. 146.

<sup>24</sup> Ibidem, pág. 141.

**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

17. Conforme a lo establecido en la cláusula 8.01.d) de la Parte II del Contrato de Concesión, es innegable que las partes contratantes se pusieron de acuerdo para que la intervención de OSIPTEL se realizará mediante un acto administrativo (una **resolución regulatoria**) que, por tal razón, estará sujeta a las condiciones de validez, eficacia e impugnabilidad del acto administrativo previstas por el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La resolución emitida por OSIPTEL debió ser impugnada en el ámbito administrativo (si la concesionaria hubiese decidido formular reconsideración) o a través de una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial.

Escrito de Contestación de la Demanda del MTC

2. **Osipitel existe desde antes de la celebración de ese contrato que Telefónica invoca en su demanda.** Según la ley de su creación, Osipitel es un **organismo público** que supervisa la inversión privada en telecomunicaciones, con personería jurídica propia y autonomía administrativa, económica y financiera<sup>3</sup>. **Desde antes de la celebración de dicho contrato, la ley confirió a Osipitel –entre otras funciones– la función de «Supervisar la calidad del servicio y la ejecución de los contratos de concesión [...]» y la función de «Dar resoluciones regulatorias dentro de los marcos establecidos por las normas del sector y los respectivos contratos de concesión»,** así como «d) Conocer administrativamente las reclamaciones de los concesionarios [...]», como es el caso de Telefónica (artículo 8°, incisos b, c y de, de la Ley N.º 26285, “Ley que dispone la desmonopolización progresiva de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de Servicios Portadores de Larga Distancia”, vigente desde el 14 de enero de 1994, es decir con anterioridad al contrato que invoca Telefónica). **Y también desde antes de la celebración de aquel contrato, la ley estableció que «[e]l poder regulatorio que esta Ley concede a Osipitel en relación a materias de su competencia será ejercido a través de resoluciones expedidas por su Consejo Directivo»,** tal como ocurrió con la Resolución del Osipitel que cuestiona Telefónica (artículo 77°, último párrafo, del T.U.O de la “Ley de Telecomunicaciones”, aprobado por el Decreto Supremo N.º 013-93-TCC del 28 de abril de 1993).

Escrito de Dúplica del OSIPTEL

**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

30. Debe tenerse presente que es la Ley N° 26285, dictada con anterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión entre el Estado Peruano y TELEFÓNICA, la que le atribuye a OSIPTEL una determinada y precisa competencia, que no es otra sino la de dictar actos administrativos (**resoluciones regulatorias** es la expresión utilizada) en el marco de la ley y de los propios contratos de concesión.

31. De esta forma, **no existe duda alguna que la actuación de OSIPTEL es el resultado de la existencia de una previa habilitación legal (lo que resulta consustancial con las exigencias propias del principio de legalidad) que le atribuye una competencia precisa y determinada**, respecto de una cuestión de orden público (con la expresión *resoluciones regulatorias* es claro advertir que se refiere a la *regulación de servicios públicos*), por lo que cabe precisar que **la Resolución de Consejo Directivo 00075-2022-CD/OSIPTEL es un acto administrativo**.

Escrito de Dúplica del MTC

- 2.25) Se observa, en consecuencia, que las Demandadas sostienen que la materia controvertida presentada en las pretensiones de TELEFÓNICA sería no arbitrable, en tanto la Resolución de Osipitel habría sido emitida tomando como base la función normativa, supervisora y reguladora, anteriormente desarrolladas.
- 2.26) Ahora bien, a partir de este punto, corresponde analizar lo pactado por las Partes en el Contrato. Así, la cláusula 8.01.d de la Parte II del Contrato establece que:

- (d) **Reducción o Terminación del Servicio.** Si la EMPRESA CONCESIONARIA, al término del PERIODO DE CONCURRENCIA LIMITADA, considera que la prestación de SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES en un área determinada mencionada en el inciso (b) anterior, no ha resultado económicamente viable como consecuencia de cambios demográficos o razones similares, **presentará ante el OSIPTEL una solicitud para la reducción o terminación de SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES.** OSIPTEL podrá solicitar a la EMPRESA CONCESIONARIA cualquier información adicional y documentación pertinente que estime necesaria para evaluar si la reducción o terminación propuesta es justificada. Antes de adoptar una resolución respecto de la solicitud de la EMPRESA CONCESIONARIA para reducir o dar por terminada la prestación de SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES, OSIPTEL publicará un aviso en diario oficial "El Peruano", señalando:

**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

- (i) que la EMPRESA CONCESIONARIA ha presentado una solicitud indicando sus razones, ámbito y efectos;
- (ii) el período dentro del cual los comentarios u objeciones con respecto a la solicitud pueden ser formulados por escrito por cualquier persona con un interés legítimo, incluyendo, en particular, a los habitantes del área afectada. Dicho período no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del aviso;
- (iii) la fecha, lugar y hora para una audiencia pública en la cual la EMPRESA CONCESIONARIA y cualquier persona con un interés legítimo podrán hacer comentarios u objeciones. Dicha fecha no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha en la que los comentarios u objeciones debieron haber sido formuladas por escrito.

En la audiencia pública a que se refiere el párrafo anterior, tendrán derecho a ser escuchados, la EMPRESA CONCESIONARIA y aquellas terceras personas que tengan un interés legítimo y que hayan presentado debidamente comentarios u objeciones.

Considerando los comentarios y objeciones escritas, así como los resultados de la audiencia pública y, previa consulta con el MINISTERIO, el OSIPTEL emitirá una resolución respecto de la solicitud de la EMPRESA CONCESIONARIA. Dicha resolución será por escrito señalando las razones por las que ha sido emitida.

Si OSIPTEL otorga la solicitud, en todo o en parte, podrá seleccionar el área en la cual la prestación de

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES sea reducida o terminada, como un área de interés social dentro del significado del Artículo 12º de la LEY DE TELECOMUNICACIONES.

- 2.27) Se advierte que la obligación del OSIPTEL, de acuerdo con la cláusula contractual, es evaluar solicitudes de terminación de servicios de telecomunicaciones por inviabilidad económica. Esta es la obligación contractual del OSIPTEL.
- 2.28) La intervención del OSIPTEL en el Contrato suscrito entre TELEFÓNICA y el MTC se puede advertir de la lectura de la Primera Cláusula Adicional del Contrato:

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

## **PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL**

Interviene en el presente CONTRATO, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL-, representado por el Sr. Jorge Kunigami Kunigami, con L.E. 25613308 para efectos de manifestar su consentimiento en relación a las estipulaciones que éste contiene, asumiendo las obligaciones, derechos y facultades que en tal virtud le corresponden.

2.29) OSIPTEL no es parte del Contrato —no es parte ni formal, ni sustancial<sup>25</sup>—, es un interviniente. En el contrato pueden intervenir personas que no son partes. Generalmente su intervención se debe a que ellas asumirán ciertas obligaciones derivadas del contrato. También puede darse la intervención para formular ciertas declaraciones o asumir ciertas funciones.

Esto, además, supone que el tercero interviniente se somete al convenio arbitral que el contrato pudiera contener para resolver las controversias relacionadas a las funciones atribuidas en virtud de las cláusulas contractuales.

2.30) De la lectura de la Primera Cláusula Adicional, el Tribunal Arbitral observa que la intervención del OSIPTEL en el Contrato se produce porque así lo acordaron tanto TELEFÓNICA como el MTC y esta intervención se hace con el fin de asumir las obligaciones, derechos y facultades que se le atribuyen. En otras palabras, OSIPTEL asume obligaciones, derechos y facultades de fuente contractual.

2.31) Como se observa del texto del literal (d) de la cláusula 8.01 del Contrato de Concesión antes trascrita, TELEFÓNICA —como empresa concesionaria—, al término del periodo de concurrencia limitada— considera que la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un área determinada mencionada en el literal (b) del artículo 8.01, no ha resultado económicamente viable como consecuencia de cambios demográficos o razones similares, tiene derecho a solicitar la reducción o terminación de servicios públicos de telecomunicaciones.

2.32) El derecho de TELEFÓNICA de reducir o terminar el servicio es de fuente contractual y se le encarga a un tercero —en el sentido de que no es parte<sup>26</sup>— pronunciarse sobre la solicitud. Al tercero que se le encarga esta función es a OSIPTEL<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Parte en sentido formal es el autor del contrato; es decir, quien emite las declaraciones contractuales constituidas (oferta y aceptación). Parte en sentido sustancial es el titular de la relación contractual a quien se le imputa el conjunto de efectos jurídicos del contrato.

<sup>26</sup> Las partes son el concedente y el concesionario. En este mismo sentido, MARTIN TIRADO, Richard. «Las partes del contrato de concesión y la participación de los organismos reguladores». En: **Revista de Derecho Público Económico**. N.º 2, julio-diciembre, 2021, pág. 154.

<sup>27</sup> MARTIN TIRADO explica que debido a la ausencia de un marco normativo respecto a las funciones de OSIPTEL y, por tanto, se incorporaron ciertas funciones a través de cláusulas contractuales. Expresamente, refiriéndose al Contrato de Concesión señala: «Se puede constatar que estos contratos a la fecha de su celebración carecían de un marco regulatorio desarrollado y que fue



### **Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

---

### **Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)

Roxana Jiménez Vargas-Machuca

Gonzalo García Calderón Moreyra

- 2.33) ¿OSIPTEL cumple esta función en cuanto órgano regulador o como tercero interviniente en el CONTRATO? Al respecto, es oportuno advertir que el procedimiento que debe seguir TELEFÓNICA para reducir o terminar el servicio es el establecido en el Contrato y OSIPTEL debe ajustarse a lo establecido en dicho procedimiento. En tal sentido, OSIPTEL está obligado a cumplir lo establecido en el literal (d) del artículo 8.01 del Contrato de Concesión.
- 2.34) En tal sentido, en opinión del Tribunal Arbitral, OSIPTEL cumple la función como interviniente en el CONTRATO y no como órgano regulador; es decir, no se pronuncia porque le corresponda hacerlo con base en alguna de las funciones que le correspondan como órgano regulador, como tal no le corresponde determinar la terminación o reducción de un servicio otorgado por el concedente (MTC).
- 2.35) Atendiendo a lo desarrollado, la pregunta es qué norma o procedimiento regulatorio siguió el OSIPTEL para emitir la Resolución cuestionada por TELEFÓNICA. Para ello, se considerarán segmentos del medio probatorio A-5 (Informe 0366-DFI/SDF/2021):

#### **I. OBJETO**

Evaluar las solicitudes de terminación del servicio de telefonía pública rural (en adelante, solicitudes de retiro) presentadas por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, TELEFÓNICA), en el marco del procedimiento establecido en la cláusula 8 de la segunda parte de sus Contratos de Concesión aprobados mediante Decreto Supremo N°11-94-TCC.

44. Por tanto, la solicitud de retiro de teléfonos públicos ubicados en centros poblados rurales presentada por TELEFÓNICA, debería evaluarse tomando en cuenta las disposiciones sobre continuidad del servicio, establecidas en la Primera Parte y Segunda Parte del Contrato de Concesión.

---

inevitable que se inserten, en los propios contratos, sendas disposiciones de contenido normativo antes que contractual» (MARTIN TIRADO, Richard. «Las partes del contrato de concesión y la participación de los organismos reguladores». En: OB. CIT., pág. 145).

**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

49. Frente a la solicitud presentada por TELEFÓNICA para la terminación del servicio de telefonía de uso público en centros poblados rurales, **el Contrato de Concesión señala que el OSIPTEL:**

- a) Podrá requerir a dicha empresa cualquier información adicional y documentación pertinente que estime necesaria, para evaluar si la reducción o terminación propuesta es justificada.
- b) Antes de adoptar una resolución respecto de la solicitud presentada, publicará un aviso en Diario Oficial “El Peruano”, señalando:
  - ✓ La presentación de la referida solicitud, con información sobre sus razones, ámbito y efectos.
  - ✓ El periodo dentro del cual cualquier persona con un interés legítimo, incluyendo, en particular, a los habitantes del área afectada, podrán presentar, por escrito, comentarios u objeciones con respecto a la solicitud presentada. El citado periodo no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del aviso.
  - ✓ La fecha, lugar y hora para una audiencia pública, en la cual, tanto la empresa operadora como cualquier persona con un interés legítimo, podrán hacer comentarios u objeciones. Esta fecha no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha en la que los comentarios u objeciones debieron haber sido formuladas por escrito.
- c) De manera previa a que el OSIPTEL emita su decisión a través de una resolución, deberá efectuar la consulta respectiva al MTC; en su calidad de concedente. La respuesta que emita el MTC, así como los comentarios y

53. Al respecto, se debe precisar que la sola presentación de la solicitud de reducción o terminación del servicio por parte de la empresa, no implica de modo alguno la aceptación o autorización de la reducción o terminación (retiro) del servicio en las áreas señaladas. Es decir, que **corresponde al OSIPTEL**, en primer término verificar el cumplimiento de las condiciones indicadas previamente, a fin de admitir a trámite la solicitud presentada por TELEFÓNICA **y evaluar los requisitos previstos en el Contrato de Concesión** para aceptar o denegar la solicitud de retiro.

**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

55. Es así que, de conformidad con lo indicado en el Contrato de Concesión, el OSIPTEL inició la ejecución de nuevas acciones, conducentes a evaluar el pedido de la administrada, por lo que mediante carta N° C.1248-GFS/2016 de fecha 16 de junio de 2016 comunicó a TELEFÓNICA que los centros poblados rurales respecto de los cuales solicitó su inclusión al Período de Observación durante los años 2014 y 2015, en total ocho (8) solicitudes de terminación, fueron reconducidos de acuerdo al procedimiento establecido en la sección 8.01 de la Cláusula 8 de la Segunda Parte de su Contrato de Concesión, como se detalla a continuación:

*"(...) señalamos que de acuerdo al Oficio N° 36992-2015-MTC/274, el OSIPTEL ha reconducido todas las solicitudes de ingreso de centros poblados a un Período de Observación, señaladas en el cuadro anterior, de acuerdo al procedimiento que se establece en la sección 8.01 de la Cláusula 8 de la Segunda Parte de su Contrato de Concesión" (...)*

63. A continuación, se desarrolla el análisis del OSIPTEL respecto a las dos (2) condiciones indicadas en el numeral 52 del presente informe, a fin de iniciar el trámite de evaluación de la procedencia de la solicitud de retiro del servicio de telefonía de uso público rural interpuesta por TELEFÓNICA, de acuerdo con lo establecido en el literal (d) de la Sección 8.01 de la Cláusula 08 - Obligaciones de la Empresa Concesionaria, del Contrato de Concesión señalado en la Sección II.

121. El Contrato de Concesión establece que el OSIPTEL, en el marco del presente procedimiento, emitirá una resolución respecto de la solicitud de terminación presentada por TELEFÓNICA, sin señalar el órgano responsable de emitir dicha decisión.

122. Sobre el particular, el numeral 73.1 del artículo 73 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir varios órganos posibles, al superior jerárquico común.

123. Actualmente, no existe órgano del OSIPTEL que ejerza función similar a la prevista en el Contrato de Concesión de TELEFÓNICA. Sin embargo, en la versión inicial del Reglamento sobre la disponibilidad y continuidad en la prestación del servicio de telefonía de uso público en centros poblados rurales, se establecía que correspondía al Consejo Directivo pronunciarse mediante resolución sobre las solicitudes de traslado o retiro de TUP, instalados por propia iniciativa de la empresa operadora.

2.36) Se advierte, en reiteradas oportunidades, que OSIPTEL, a lo largo de su Informe, continuamente se remite a lo regulado por el Contrato de Concesión suscrito entre



**Laudo Parcial de Derecho**

Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
Caso arbitral N° 0609-2022-CCL

**Tribunal Arbitral**

Luciano Barchi Velaochaga (presidente)  
Roxana Jiménez Vargas-Machuca  
Gonzalo García Calderón Moreyra

TELEFÓNICA y el MTC; es decir, el análisis y razonamiento del OSIPTEL se fundamenta en el Contrato y no a funciones preestablecidas por ley.

- 2.37) Por su parte, la Resolución del OSIPTEL sometida a arbitraje por TELEFÓNICA también hace referencia al Contrato como puede observarse en los siguientes extractos de ella:

Que, en el literal d) de la cláusula 8.01 de la segunda parte del referido Contrato de Concesión también se señala que, corresponde al OSIPTEL, adoptar la resolución respecto a la solicitud para la reducción o terminación de servicios públicos de telecomunicaciones, previa consulta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y realización de audiencias públicas en las que la empresa concesionaria y terceros con legítimo interés presenten objeciones o comentarios;

**Artículo 1.-** Declarar **IMPROCEDENTE** las solicitudes presentadas por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. en el marco de lo dispuesto en el Contrato de Concesión para la prestación del Servicio Portador, Servicio Telefónico Local y Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional en la República del Perú aprobado por Decreto Supremo N° 011-94-TCC, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de mayo de 1994, para la terminación de la prestación del servicio de telefonía de uso público en setecientos cincuenta y seis (756) centros poblados rurales.

- 2.38) Se advierte que la misma Resolución del OSIPTEL hace mención a que es el Contrato el que establece que le corresponde adoptar la resolución respecto a la solicitud para la reducción o terminación de servicios públicos de telecomunicaciones.
- 2.39) Como se ha señalado, la Resolución de OSIPTEL que ha sido sometida a arbitraje por parte de TELEFÓNICA no atañe a ninguna de las funciones anteriormente desarrolladas, que la ley ordinaria asigna tradicionalmente al ente regulador en un contrato de concesión.
- 2.40) En otras palabras, la Resolución de Osipitel no se trata de una decisión relacionada a tarifas reguladas o imposiciones de sanciones por alguna irregularidad en el servicio prestado a los usuarios, en cuyo caso tal Resolución sí configuraría como un acto administrativo ordinario que debiera ser impugnado, luego de agotada la vía administrativa, en el fuero judicial ordinario por medio de un proceso contencioso administrativo.
- 2.41) Una facultad del OSIPTEL, tan singular y específica como la relativa a decidir sobre la terminación del servicio de telefonía pública en determinados centros poblados tiene estrictamente fuente contractual, ya que dicha facultad no tiene antecedente ni correlato en las funciones que la ley ordinaria asigna al ente regulador.
- 2.42) El Tribunal Arbitral advierte que es en virtud del Contrato que se otorga al OSIPTEL la facultad de decidir sobre la terminación del servicio. Incluso, podrían haber prescindido de ello, dado que, a diferencia de las funciones ordinarias de los entes

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

reguladores, la ley no impone a las partes una facultad tan singular y específica como la establecida en el Contrato a favor de OSIPTEL.

- 2.43) En ese sentido, tomando en consideración que la fuente de la facultad del OSIPTEL de decidir sobre la terminación del servicio es estrictamente contractual, el Tribunal Arbitral considera que la Resolución de Osipitel sometida a arbitraje no configura un acto administrativo, que deba ser impugnado en la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial.
- 2.44) Por el contrario, atendiendo a que dicha decisión deriva de una facultad asignada por las partes a través del Contrato, el Tribunal Arbitral determina que la vía correspondiente para impugnarla es el mecanismo de solución de controversias previsto por las partes en el propio Contrato: el arbitraje.
- 2.45) En consecuencia, las objeciones formuladas por el MTC y el OSIPTEL con relación a que las pretensiones de TELEFÓNICA serían materias no arbitrables, deben ser declaradas infundadas.

### **3. De la objeción de cosa decidida**

- 3.1) El OSIPTEL y el MTC formulan objeción contra la Demanda de TELEFÓNICA, indicando que sus pretensiones versarían sobre materia con calidad de cosa decidida.
- 3.2) Las Demandadas han destacado, a lo largo de sus fundamentos, que la Resolución de Osipitel es una resolución administrativa contra la cual TELEFÓNICA no interpuso impugnación alguna en la vía administrativa y tampoco demandó judicial alguna, dejando transcurrir los plazos legales.
- 3.3) El MTC y el OSIPTEL indican que, en consecuencia, la Resolución de Osipitel adquirió la autoridad de cosas decidida<sup>28</sup>, equivalente en todos sus efectos y contenido a la cosa juzgada.
- 3.4) En ese sentido, respecto al derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada el Tribunal Constitucional ha señalado que:

«...garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla, y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos

---

<sup>28</sup> «La cosa decidida es una institución que tiene por objeto otorgar seguridad jurídica en el ámbito prejudicial, mediante el cual se atribuye dicha cualidad a la resolución administrativa una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento administrativo, llegando a una decisión final que solo puede ser cuestionada en sede judicial a través de un proceso contencioso administrativo (...)». Consulta: <https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1518826-13-2013-jus-cn>. Fecha: 11 de enero de 2024.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó» (STC N.º 4587-2004-AA/TC, fundamento 38; STC N.º 0978-2012-PA/TC).

El Tribunal Constitucional también ha establecido respecto de la cosa juzgada que:

«...impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque este fuera de una instancia superior, precisamente, porque habiendo adquirido carácter firme, cualquier clase de alteración importaría una afectación al núcleo esencial del derecho» (STC N.º 0818-2000-AA/TC, fundamento 4; STC N.º 0978-2012-PA/TC).

3.5) Ahora bien, conforme se ha desarrollado previamente, la Resolución del Osiptel materia de la Demanda de TELEFÓNICA no es un acto administrativo, sino una manifestación de voluntad contractual, en tanto la fuente de la obligación del OSIPTEL proviene del Contrato y no de las funciones que la ley ordinaria le asigna.

3.6) El artículo 1 del TUO de la Ley N.º 27444, LPAG define al acto administrativo de la siguiente manera:

«1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

[...]» (subrayado agregado).

3.7) Como se ha señalado, la declaración que emite el OSIPTEL al resolver la solicitud de TELEFÓNICA, no lo hace en el marco de normas de derecho público, ni en el marco de un procedimiento administrativo —es decir, no se emite dentro de un procedimiento regular o predeterminado por la ley—, sino lo hace en el marco del Contrato de Concesión.

3.8) MORÓN URBINA, al comentar la exigencia que «la actuación pública que califica como acto administrativo ha de estar sujeta a los preceptos del Derecho Público o lo que es lo mismo realizada en ejercicio de una función administrativa» afirma que «Esta exigencia excluye la posibilidad de calificar como acto administrativo las actuaciones de las entidades, que bajo marco legal específico y habilitante, se sujetan al derecho común, despojándose la entidad de sus potestades públicas, como por ejemplo sucede cuando una entidad pública concerta un contrato de estabilidad jurídica con un particular, o se somete a arbitraje para definir las

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

controversias que pudiera suscitar su actuación»<sup>29</sup>. Al respecto, debe recordarse que el contrato de concesión es un contrato-ley<sup>30</sup> que tienen naturaleza civil.

- 3.9) En ese sentido, resulta claro que TELEFÓNICA no podría haber seguido el procedimiento de impugnación previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General y en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, siendo, además, que los plazos no le resultan aplicables por tratarse de materia arbitrable.
- 3.10) Por lo tanto, las objeciones referidas a que la materia de las pretensiones de la Demanda de TELEFÓNICA posee calidad de cosa decidida, deben ser declaradas improcedentes.

### **4. De la objeción de trato directo**

- 4.1) El OSIPTEL y el MTC formulan objeción contra la Demanda de TELEFÓNICA, indicando que cuatro de las seis pretensiones no habrían sido sometidos al procedimiento de trato directo, previsto en el convenio arbitral.
- 4.2) De esta manera, en primer lugar, el Tribunal Arbitral analizará la cláusula 3.01 del Contrato, la cual establece lo siguiente:

### **CLAUSULA 3 ARBITRAJE**

#### **SECCIÓN 3.01: SOMETIMIENTO**

Cualquier controversia que surja de o en conexión con este CONTRATO, su interpretación o ejecución, incluyendo cualquier aspecto relativo a su existencia, validez o terminación, será resuelto amistosamente por las partes y en caso estas partes no llegaran a un acuerdo satisfactorio en el proceso de conciliar, la o las materias en controversia serán finalmente resueltas mediante arbitraje administrado por la Cámara de Comercio de Lima.

Ambas partes convienen en que el procedimiento arbitral no será iniciado o este no prosperará, para las controversias relativas a una materia o en relación a un asunto que pueda estar o está pendiente de solución conforme a los procedimientos que este mismo contrato establece.

- 4.3) El Tribunal Arbitral advierte que la cláusula señalada establece un procedimiento de «Trato Directo» de manera escalonada para la solución de las controversias derivadas del Contrato previo a recurrir al arbitraje. Este tipo de cláusulas han sido denominadas por la doctrina como «cláusulas escalonadas de solución de conflictos».
- 4.4) El «trato directo» previsto en la Cláusula 44 del Contrato establece el siguiente procedimiento:

<sup>29</sup> MORÓN URBINA, Juan Carlos. **Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General**. Décima edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2014, pág. 126.

<sup>30</sup> Artículo 3° de la Ley N.° 26285.

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- Primer paso: Si alguna de las Partes considera que existe una controversia vinculada al Contrato, su interpretación o ejecución, entre otros, será resuelto pro las Partes.
  - Segundo paso: Si las partes no llegan a un acuerdo satisfactorio en el proceso de conciliar, la o las materias en controversia serán resueltas por arbitraje.
- 4.5) De esta manera, si la controversia no ha sido solucionada de forma amigable, de estimarlo conveniente cualquiera de las Partes, podrá proceder al arbitraje previsto en la cláusula 45.1 del Contrato. Como se observa las Partes acordaron someter las controversias, antes de recurrir al arbitraje, a una negociación a través de consultas mutuas.
- 4.6) ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con el procedimiento de «Trato Directo» previsto en las Cláusula 44 y 45 del Contrato? Para responder esta pregunta es necesario tener en consideración las dos teorías sobre la naturaleza del arbitraje: la teoría jurisdiccionalista y la contractualista.
- 4.7) La teoría jurisdiccionalista considera que el arbitraje es una institución de naturaleza jurisdiccional. De acuerdo con Ledesma Narvaez: «Frente a las diversas posiciones que se esgrimen sobre la naturaleza jurídica del arbitraje, podemos sostener que nuestro sistema jurídico asume la teoría jurisdiccionalista a partir de la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho del inciso 1 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado —que considera excepcionalmente al arbitraje como una expresión de jurisdicción—, así como del precedente vinculante que sobre el particular ha realizado el TC [...]»<sup>31</sup>.
- 4.8) En efecto, en el fundamento 11 de la STC-6167-2005-PHC-Lima, Fernando Cantuarias Salaverry con la 4ª Sala Penal con reos libres de la Corte de Lima el Tribunal Constitucional consideró que «la facultad de los árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes en conflicto, prevista en el artículo 2, inciso 24, literal “a” de la Constitución, sino que su origen y su límite en el artículo 139 de la misma Carta».
- 4.9) En el fundamento 9 de la misma sentencia se señala:
- «Asimismo, la naturaleza de jurisdicción independiente del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen el derecho al debido proceso».

---

<sup>31</sup> LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. ***Jurisdicción y arbitraje***. Tercera edición. Lima: Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, pág. 37-38.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

- 4.10) Teniendo en consideración lo señalado por el TC en el fundamento 13 del precedente vinculante antes citado, resulta claro que: «... en el marco de un proceso arbitral deben ser respetados los derechos fundamentales y las garantías procesales y sustanciales que componen el derecho al debido proceso» lo que comprende la tutela procesal efectiva.
- 4.11) Como lo ha señalado el TC<sup>32</sup> a través de la tutela procesal efectiva «...se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión...».
- 4.12) La invocación de las etapas previas de una cláusula «escalonada» no puede ni debe ser utilizada como una suerte de candado que impida a las partes recurrir al arbitraje como mecanismo final de solución de controversias puesto que ello afectaría el derecho del justiciable de poder acceder a la jurisdicción elegida (la arbitral).
- 4.13) En efecto, una cláusula, como la del Contrato, que establecen una instancia obligatoria de negociación previa al arbitraje, pone una condición para que este pueda utilizarse, lo que conlleva a que la jurisdicción arbitral no sea directamente accesible<sup>33</sup>.
- 4.14) En este sentido, resulta importante tener en consideración lo señalado por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima en el expediente N.º 159-2016 respecto a que el incumplimiento de la etapa previa al arbitraje prevista en un convenio arbitral no constituye una causal de nulidad del laudo, sino el incumplimiento de una disposición contractual:
- «La supuesta disposición vulnerada es de naturaleza contractual y no entraña una fijación de reglas procedimentales a que se sujetaría el arbitraje».
- 4.15) Sin perjuicio de lo señalado, el Tribunal Arbitral advierte que el incumplimiento de las «cláusulas escalonadas de solución de conflictos» no supone que se afecte la competencia del Tribunal Arbitral. De acuerdo con la doctrina, el incumplimiento de las «cláusulas escalonadas de solución de conflictos» conlleva la suspensión del proceso arbitral, hasta que se cumpla con el pacto contractual.
- 4.16) En efecto, el doctor Roque CAIVANO señala lo siguiente en relación con las llamadas cláusulas escalonadas:

«En cualquier caso, es evidente que no se trata de una cuestión de competencia que ponga en tela de juicio la jurisdicción de los árbitros. Una

---

<sup>32</sup> Exp. N.º 763-2005-PA/TC.

<sup>33</sup> CAIVANO, Roque, «Las cláusulas “Escalonadas” de resolución de conflictos (Negociación, mediación o conciliación previas al arbitraje)». En: ***Tratado de Derecho Arbitral***. Carlos Alberto Soto (director). Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana, Grupo Editorial Ibáñez e Instituto Peruano de Arbitraje, 2011, pág. 76.

### ***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

### ***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*

*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*

*Gonzalo García Calderón Moreyra*

objeción jurisdiccional, que impugna la competencia de un tribunal arbitral, consiste en plantear que ese tribunal no puede conocer el caso por carecer de competencia: una objeción diferente, que cuestiona la admisibilidad de la demanda, es la que se presenta cuando el demandado plantea que el tribunal no debe (o no debe ahora) conocer el caso. Cualquiera sea la interpretación que se dé a la objeción en análisis, no está en tela de juicio que el tribunal arbitral es competente, sino únicamente si puede o no admitir la demanda en ese momento»<sup>34</sup>.

- 4.17) Ello se explica en que los escalones iniciales de las cláusulas multinivel se deben analizar en un contexto en el cual el propósito de pactarlas es buscar formas alternativas de solución de las disputas, de modo que su incumplimiento, ni debe afectar la eficacia de la cláusula escalonada ni debe afectar la jurisdicción de los árbitros. Se trata más bien de un tema de admisibilidad de la demanda, caso en el que cabría una suspensión del procedimiento arbitral hasta que se realice la subsanación respectiva.
- 4.18) En este mismo sentido: «La jurisprudencia francesa considera, desde una sentencia de principio dictada por la Corte de Casación el 14 de febrero de 2003 en sesión (casi) plenaria, que el incumplimiento por una parte del escalón prearbitral obligatorio pactado constituye una cuestión de admisibilidad de la demanda»<sup>35</sup>.
- 4.19) Anne Carole CREMADES señala que, de esta decisión de principio, la jurisprudencia y la doctrina han sacado dos consecuencias: (i) La primera es que, al tratarse de una cuestión de admisibilidad de la demanda, no constituye una excepción de incompetencia del tribunal arbitral y (ii) La segunda es que la demanda es inadmisibile provisionalmente, en el estado actual de la causa («irrecevabilité en l'état»). Significa que la inadmisibilidad es susceptible de ser regularizada durante el procedimiento<sup>36</sup>.
- 4.20) Si bien la Corte de Casación francesa ha modificado su jurisprudencia judicial en una decisión del 12 de diciembre de 2004, señalando que se trata de una inadmisibilidad que no es susceptible de ser subsanada en el mismo procedimiento judicial mediante una suspensión, Anne Carole CREMADES señala al respecto: «un tribunal arbitral con sede en Francia no tiene obligación de seguir la jurisprudencia francesa en materia procesal (solamente tiene que respetar las normas de orden público internacional y las leyes de policía francesas). Por lo tanto, los árbitros pueden preferir ignorar la nueva jurisprudencia de la Corte de Casación y suspender el arbitraje el tiempo de dejar a las partes cumplir con el requisito de mediación previa (o incluso hacer la vista gorda ante el incumplimiento y proseguir con el arbitraje sin obligar a las partes entablar una mediación)». Queda claro pues,

---

<sup>34</sup> CAIVANO, Roque, «Las cláusulas “Escalonadas” de resolución de conflictos (Negociación, mediación o conciliación previas al arbitraje)». En: *Ob. Cit.*, pág. 78.

<sup>35</sup> CREMADES, Anne-Carole. «¿Qué sanción en caso de incumplimiento de una cláusula escalonada de resolución de controversias?». Kluwer Law International, 2017, pág. 2.

<sup>36</sup> Loc. Cit.

***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*

que, en Francia, al tratarse de un tema de admisibilidad, queda a discreción de los tribunales arbitrales tratar el tema y en cualquier caso, no es una causal de anulación del laudo.

- 4.21) Con relación al tratamiento en Suiza, Anne Carole CREMADES comenta que, según una sentencia del Tribunal Federal de marzo de 2016, se considera que la solución más adecuada en caso de incumplimiento de una cláusula escalonada es la suspensión del arbitraje y la fijación de un plazo para remediar el incumplimiento.
- 4.22) El Tribunal Arbitral advierte, de la revisión de los medios probatorios presentados por las Partes, que TELEFÓNICA hace referencia expresa a las controversias que han sido planteadas en su Demanda y cuestionadas por las Demandadas.
- 4.23) Debe tenerse en consideración que, conforme al Contrato, las partes deben someter a trato directo «controversias», «materias controvertidas» o «asuntos controvertidos». El Contrato no exige ni obliga que las futuras pretensiones arbitrales sean objeto de trato directo.
- 4.24) El Tribunal Arbitral considera que los temas que fueron sometidos a trato directo sí son extensibles y, por tanto abarcan las pretensiones planteadas por TELEFÓNICA, razón por la cual se ha cumplido con el mecanismo escalonado para someterlas a arbitraje.
- 4.25) Por tanto, la objeción referida al trato directo por parte del MTC y del OSIPTEL debe ser declarada infundada.

**SE RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR FUNDADA** la solicitud de emitir un Laudo Parcial con respecto a las objeciones formuladas por el MTC y el OSIPTEL.

**SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA** la objeción formulada por el MTC y el OSIPTEL con relación a que las materias controvertidas presentadas por TELEFÓNICA en su Demanda serían no arbitrables.

**TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la objeción formulada por el MTC y el OSIPTEL con relación a que las materias controvertidas presentadas por TELEFÓNICA en su Demanda tendrían autoridad de cosa decidida.

**CUARTO: DECLARAR INFUNDADA** la objeción formulada por el MTC y el OSIPTEL con relación a que cuatro de las seis pretensiones presentadas por TELEFÓNICA en su Demanda no habrían seguido el procedimiento de trato directo.

**QUINTO: DISPONER** la continuación de las actuaciones arbitrales según el estado del proceso.



***Laudo Parcial de Derecho***

*Arbitraje seguido por Telefónica del Perú S.A.A. contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones*  
*Caso arbitral N° 0609-2022-CCL*

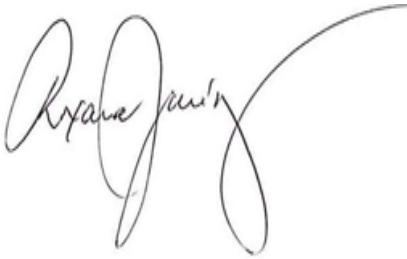
---

***Tribunal Arbitral***

*Luciano Barchi Velaochaga (presidente)*  
*Roxana Jiménez Vargas-Machuca*  
*Gonzalo García Calderón Moreyra*



**Luciano Barchi Velaochaga**  
Presidente



**Roxana Jiménez Vargas-Machuca**  
Árbitra



**Gonzalo García Calderón Moreyra**  
Árbitro